

---

Isauro Suárez

## EL MOVIMIENTO CAMPEÑO COLOMBIANO

---

### Introducción

Existe en Colombia un “movimiento campesino”. Y si existe, ¿cuáles son las características que lo definen?; ¿cuáles sus formas de lucha, sus relaciones con el Estado y los vínculos como los demás sectores del movimiento popular?; ¿cuáles sus avances y limitaciones de índole organizativa y cuáles las condiciones de posibilidad de su desarrollo en el futuro?

Nuestra hipótesis fundamental, que pretende demostrarse en lo que sigue, dice que en Colombia, al concluir la primera mitad de la década de los ochenta, existe una población campesina cuyos estratos más bajos reciben con mayor vigor el impacto de la crisis económica y política provocada por el modelo neoliberal de desarrollo, y que al no encontrar alternativas de empleo se lanzan a las tomas de tierra en una gran parte de las regiones colombianas para presionar del Estado una modificación de la estructura de tenencia y la implementación de políticas que mejoren el nivel de vida de la masa campesina. A nivel de organización, el movimiento se halla atomizado en diversos grupos que a pesar de sus diferencias ideológicas avanza, con algunas dificultades, hacia la reunificación organizativa en el contexto de las luchas que desarrollan los demás sectores del movimiento popular.

## 1. ANTECEDENTES: LAS LUCHAS POR LA TIERRA DURANTE LA DÉCADA DEL SETENTA Y SUS RESULTADOS

No es posible entender lo que sucede hoy día sin colocar como telón de fondo la más inmediata gesta del movimiento campesino en la década del setenta, cuando un sector de la burguesía liberal impulsa desde el Estado una política de reforma agraria y dentro de ella un programa de organización campesina para la participación.

Durante el período 1950-1965 la profundización del desarrollo industrial sustitutivo y la ampliación de los circuitos mercantiles encontraban a la economía campesina en una situación desventajosa. Dentro de la frontera económica definida por el ámbito andino y los valles interiores, los procesos históricos de concentración de tierras habían arrinconado al campesino en estructuras minifundistas, localizadas generalmente sobre los peores suelos y en las laderas de las montañas. Por ese motivo, la principal manifestación de la incorporación creciente del campesinado al mercado no consistió en un aumento notable de su producción agrícola, sino, más bien, en una fuente de descomposición que erosionaba los estratos campesinos inferiores y arrojaba a la circulación mercantil tanto sus tierras como su mano de obra en proceso de proletarización.

Mientras las parcelas pasaban a contribuir a la acumulación de tierras por parte de los terratenientes, o a la consolidación de sectores campesinos medios más estables, la fuerza de trabajo rural se orientaba hacia las ciudades, y, en menor medida, hacia la apertura de nuevos frentes de colonización y hacia la formación de un incipiente proletariado agrícola trashumante.

Por contraste con las penurias por las cuales atravesaba el campesinado, el ahondamiento de la industrialización sustitutiva significó un gran estímulo para el capitalismo agrario, puesto que la creciente demanda de productos para

la transformación agroindustrial produjo cambios rápidos en algunas zonas de latifundio en donde los terratenientes o inversionistas agrícolas desplazaron el ganado por la producción en gran escala de azúcar, arroz y oleaginosas. Además de erradicar el peonazgo y otras relaciones de trabajo precapitalistas asociadas con la ganadería extensiva, este proceso implicó un aumento notable en las demandas estacionales de jornaleros agrícolas y una fuerte capitalización del agro en torno a la utilización de insumos, maquinarias y nuevas tecnologías (1).

Sobre este marco histórico es, entonces, en el que se colocan y se pueden entender las luchas por la tierra a partir de los años setenta bajo la dirección de la recién creada Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) por medio del Decreto 755 de 1967 durante la administración de Carlos Lleras Restrepo (representante del ala reformista del partido liberal), y que consistió en asociar a los campesinos usuarios de los servicios del Estado en una organización autónoma, de cobertura nacional y amplia participación de las bases campesinas. Con el surgimiento de la ANUC como fuerza integradora, las luchas se multiplicaron, pero la derrota de la corriente reformista al interior del bloque en el poder hacia 1972 precipitó la confrontación entre los campesinos y la nueva política estatal contrarreformista. Las oleadas de invasiones en 1971 marcan el punto más alto de las luchas de la tierra, ya que en ellas participaron unas 16.000 familias que se movilizaron en 13 de los 23 Departamentos colombianos y ocuparon 645 predios. Sin embargo, esta arremetida no alcanzó a tener la cobertura ni la profundidad necesarias para convertirse en una revolución agraria que pudiera quebrar el poder terrateniente. Las ocupaciones se concentraron en tres regiones: Costa Atlántica, Huila-Tolima y Llanos Orientales.

---

(1) La anterior caracterización ha sido tomada del estudio de ZAMOSCA, León. **Los Usuarios Campesinos y las Luchas por la Tierra en los Años Setenta**, Editorial CINEP, Bogotá, 1983.

En la primera de ellas, que incluye un extenso territorio del norte de Colombia, caracterizado por la existencia secular de latifundios de ganadería extensiva, fueron varios los conflictos que dieron lugar a las invasiones como las que se originaron por las tierras dejadas por la Compañía Frutera de Sevilla, en el Departamento del Magdalena, las disputas con los terratenientes por los terrenos baldíos de las márgenes de los ríos y de aquellas tierras producto de la desecación de varias ciénagas en esta región.

En Huila y Tolima, Departamentos del interior del país, arrendatarios y aparceros de las haciendas ganaderas de las vertientes de las cordilleras andinas y de zonas marginales de los valles, junto con los jornaleros agrícolas de las haciendas que en las últimas décadas habían suprimido los contratos de tipo precapitalista, se lanzan juntos a la recuperación de tierras. En los Llanos Orientales los conflictos de los antiguos colonos con los terratenientes por la titulación de las tierras, problema que no se había resuelto durante la década de los sesenta, encuentran expresión organizativa con el surgimiento de la ANUC (2).

Al lanzarse a la acción directa los usuarios se hicieron receptivos a ideologías izquierdistas que remplazaban la anterior legitimación estatal reformista; pero aunque la politización y la mayor organización sustentaron durante los primeros años la beligerancia de algunos sectores, varios elementos incidieron en el progresivo reflujo de las luchas por la tierra: **la política oficial contrarreformista** que se concretó en 1972, destruyó el marco legislativo que daba paso legal para la distribución de tierras y logró, a través de una segregación de una línea gobiernista de la ANUC, dividir al movimiento campesino.

---

(2) Un interesante estudio que complementa la visión del problema de los colonos en particular en el Caquetá, antes del surgimiento de la ANUC es el de ROBIN, Ruth. **Development Strategies in Rural Colombia: The Case of Caqueta**. UCLA Latin American Center, Los Angeles, Ca. 1983.

Esta contrarreforma condujo a una **escalada represiva generalizada** que, combinando la acción de las autoridades con el terror sembrado por los grupos de choque de los terratenientes, se tradujo en la muerte de más de un centenar de líderes entre 1971 y 1978.

**La apertura de nuevas alternativas ocupacionales** en los cultivos de plantación, **las migraciones estacionales a Venezuela**, y **el desarrollo de la economía marihuanera**, contribuyeron a la desmovilización campesina en las áreas de mayor conflicto.

Al interior de la organización campesina radical, la ANUC LÍNEA SINCELEJO, el tipo de posiciones políticas prevalentes, el divisionismo y manejo burocrático y manipulador, fueron alienando a las bases y descomponiendo gradualmente las estructuras organizativas.

Dentro del contexto de los cambios socioeconómicos y los problemas de la nueva economía campesina individual y asociativa, otro elemento que incidió en el reflujo de la ANUC fue la incapacidad de la organización para adaptarse a las condiciones cambiantes y abanderar las reivindicaciones que surgían entre los jornaleros y los socios de las empresas comunitarias.

Como resultado final de todo este proceso, el ciclo de las luchas por la tierra coordinadas por la ANUC Línea Sincelejo se cerró en 1978 dejando a esta organización en una profunda crisis en el contexto de un régimen que se inauguraba y se caracterizó como abiertamente represivo de las luchas populares entre 1978 y 1982.

## **2. EL MOVIMIENTO EN LA ACTUALIDAD**

En términos macroeconómicos el sector agropecuario colombiano se caracteriza hasta la mitad de la década de los ochenta por presentar una profunda crisis que tiene sus orígenes en un fuerte receso de la actividad industrial y en una caída

sensible de las cotizaciones internacionales de los principales productos agropecuarios de exportación, tales como el algodón, las oleaginosas, el azúcar y el café. La agricultura comercial, pierde, entonces, gran parte de los mercados externos e internos, teniendo que acudir tanto a las importaciones de alimentos como de materias primas, según los dictados de las políticas neoliberales en boga en la mayor parte de los países latinoamericanos en aquellos años. En el caso colombiano, las importaciones de grasas pasaron de US\$ 12 millones en 1970 a US\$ 98 millones en 1980, en tanto que las importaciones de cereales pasaron de US\$ 18 millones a US\$ 24.8 en el mismo período. El efecto fue el desplazamiento de la producción nacional de alimentos y materias primas por importaciones, la pérdida de autosuficiencia alimentaria y el desencadenamiento de la crisis productiva de toda la agricultura colombiana. (3)

El campesinado colombiano, a pesar de su intensa movilización durante la década de los setenta, no logró modificar la estructura de tenencia de la tierra: las 822.792 hectáreas redistribuidas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) sólo representan el 2.6 o/o del total de la superficie censada en 1970 y no llegaron a afectar más que al 8.7 o/o de la tierra concentrada por las propiedades mayores de 1.000 hectáreas. Las 30.457 familias que obtuvieron parcelas apenas constituyeron el 3.2 o/o del total de beneficiarios potenciales que el mismo INCORA había estimado que existían en 1970.

Por lo tanto, la combinación de elementos tales como una gran movilización campesina frustrada, una política de reforma agraria derrotada a la postre y la subsiguiente implementación de programas de desarrollo agrícola basados sobre la

---

(3) EL CINEP - Departamento Rural, ha elaborado un estudio, no publicado, sobre la crisis económica general del sector agropecuario con base en las fuentes estadísticas oficiales, estudios de los grandes gremios y algunos análisis de organizaciones sindicales independientes.

gran empresa agroindustrial, es lo que permite explicar el asolador panorama de atraso y pobreza que caracteriza a la población campesina colombiana constituida hoy por 9.5 millones de personas que representan el 35 o/o del total de la población colombiana calculada para 1984.

Específicamente el subsector campesino lo conforman unas 200.000 familias que no poseen tierras y casi un millón que trabajan en parcelas de hasta 20 hectáreas, ocupan una superficie de 3.8 millones de hectáreas (12 o/o del total disponible) y representan el 83 o/o del número total de explotaciones. El promedio de tierra por familia campesina que la posee en cualquiera de las formas de tenencia sólo llega a las 4 hectáreas.

Se configura así, una estructura agraria en la cual coexisten grandes latifundios en parte ociosos y en parte dedicados a la producción de bienes para la exportación (café, azúcar, banana, carne) y materias primas agroindustriales (algodón, soya, sorgo, palma africana), al lado de un universo de minifundios y pequeñas propiedades sobre las cuales se asienta la mayor parte de la producción de alimentos, posee escasas tierras y de baja calidad, con productores que perciben bajos ingresos y se hallan desorganizados tanto en la fase de producción como en la de comercialización.

### **La calidad de vida campesina**

Esta desventaja económica se refleja en la calidad de vida de la población campesina, considerada por el Ministerio de Agricultura como 15 años atrás de la que tiene en promedio la población urbana en 1984, y cuyos aspectos críticos son la prevalencia de altos niveles de mortalidad en los menores de un año ocasionados por enfermedades de fácil prevención; altos índices de desnutrición infantil y adulta comparables a los detectados para el país a mediados de la década del sesenta; persistencia del analfabetismo y de bajos niveles educativos; creciente vinculación de mujeres y niños a la actividad productiva de la parcela para asegurar la subsistencia

del grupo familiar, ausencia total de seguridad social para más de un millón de asalariados rurales, y déficit de servicios básicos como el agua y las instalaciones sanitarias en la mayoría de las viviendas campesinas (4).

## 2.1. Principales manifestaciones de lucha del movimiento campesino e indígena

### Las tomas de tierra: principal muestra de vitalidad del movimiento campesino

En el conjunto del campesinado pobre (asalariados, pequeños y medianos propietarios) existe un ánimo de escepticismo tanto frente a las posibilidades reales de una política de redistribución de tierras como a la de una reorientación de los recursos del Estado en favor de la pequeña y mediana producción campesina. Esto lleva al convencimiento cada vez más claro que sólo un cambio impulsado por el movimiento popular en las estructuras de la sociedad y del Estado colombiano, pueden garantizar el logro de estas aspiraciones campesinas.

De allí que las tomas de tierras en una gran parte del territorio nacional hayan vuelto a revivirse en forma espontánea y aislada afectando no sólo tierras presuntamente baldías (de propiedad de la Nación) sino también de propietarios privados ausentistas. Estas tomas han significado, por consiguiente, el primer cuestionamiento del ordenamiento legislativo, claramente arcaico, sobre el sistema de tenencia de la tierra y son la principal manifestación de vitalidad del movimiento campesino colombiano. Sus protagonistas, (minifundistas y proletarios rurales) son los sectores más pobres del campo y quienes resienten con mayor rigor la crisis de producción del conjunto del sector agropecuario. Esta beligerancia campesina se ubica casi que exactamente en una relación geo-

---

(4) Ver, **Situación Social de la Población Rural Colombiana 1970-1983** elaborado por el MINISTERIO DE AGRICULTURA en 1984.



gráfica de continuidad con la que se dio durante la década del setenta y es allí en donde se sitúan los más claros gérmenes de reorganización campesina autónoma frente al Estado y los partidos tradicionales; la nueva generación de dirigentes campesinos constata que sólo una gran presión popular mediante sólidas estructuras organizativas garantizarán la posibilidad de cambios significativos con participación democrática (5).

**No obstante, a esta manifestación intrínseca de vitalidad, no corresponde un desarrollo consecuente de las estructuras organizativas.** Las luchas se dan aisladas, descoordinadas y en algunos casos la respuesta represiva ha sido tan violentamente desproporcionada que el movimiento se ha retraído y ha cundido el desaliento en las bases que por su larga e infructuosa experiencia fácilmente vuelven a creer que cualquier reivindicación sólo es posible si se realiza dentro de los marcos de la legalidad instituida.

Sin embargo, el movimiento que lucha por la tierra, aún con sus actuales características de aislamiento, espontaneísmo, dispersión orgánica y resultados parcialmente inciertos (puesto que a veces se gana la tierra y otras veces se pierde), persiste en cuestionar radicalmente el latifundio. La contraofensiva de ahora como la de antes ha sido la de la represión, y la de la marginación ideológica, asimilando cualquier acción campesina por la recuperación de la tierra a categorías de subversión del orden "legalmente constituido".

En esta sucesión de luchas hay una confrontación a veces sangrienta con el poder terrateniente y con las entidades estatales en la cual gana, frecuentemente, no quien tiene la razón sino quien tiene la fuerza. En ese caso el movimiento campesino apela a las instancias supremas del Estado en una actitud de diálogo pero allí tampoco ha encontrado respuestas.

---

(5) Revista *¿QUE PASO?*, No. 3 de Marzo de 1984, publicada por el CINEP trimestralmente.

En las regiones de mayor conflicto los partidos políticos tradicionales vienen reconociendo que el problema agrario requiere soluciones que implican, ante todo una auténtica reforma agraria, ya que los recurrentes conflictos por la tierra y el aplazamiento de soluciones, erosionan paulatinamente el mecanismo de control estatal y el ascenso de los partidos tradicionales sobre la población rural a través de los caciques políticos locales, lo cual permite, de rebote, que el creciente descontento sea canalizado o por el movimiento guerrillero o por un movimiento democrático nuevo.

### **El movimiento indígena**

En lo concerniente al movimiento indígena actual, desde los tiempos coloniales viene luchando por la recuperación de sus tierras apropiadas violentamente por terratenientes. Las formas de lucha han sido la ocupación de hecho de las tierras usurpadas y la presión ante el Estado para que respete las leyes que otorgan el derecho de posesión de las tierras de resguardo (reservaciones) a los indígenas sobrevivientes, estimados en 450.000, de los cuales 250.000 se hallan en el Departamento del Cauca en donde está la organización indígena de mayor trayectoria, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), creado en 1971 en el contexto de las luchas de los usuarios campesinos.

El CRIC desde sus inicios adoptó un estilo de trabajo flexible y de acuerdo a las condiciones económicas y sociales de los grupos indígenas. Este pragmatismo, sin embargo, ha estado orientado por un enfoque fundamental de las luchas indígenas definidas como de **carácter étnico-cultural** (de grupos indígenas oprimidos) y de **clase** (como parte del conjunto de las clases populares explotadas por el sistema capitalista). La lucha por la tierra se ha mantenido como eje de las actividades de la organización pero las condiciones particulares de cada comunidad han hecho que momentáneamente se impulsen otras reivindicaciones de carácter cultural o económico. El permanente impulso a las formas comunitarias, la impor-

tancia dada a la consolidación de organizaciones de nivel local, la posición unitaria frente a las organizaciones populares y la democracia al interior del CRIC, han sido elementos de estabilidad de la organización y la presentan como una de las más sólidas y respetables no sólo en el contexto del movimiento campesino sino en el del movimiento popular colombiano (6).

### **El proletariado rural**

El proletariado rural, por la agudización de la crisis agrícola, ha sido el sector del campesinado que más ha resentido el impacto de esa crisis, y como salida desesperada busca, más que ningún otro sector, el acceso a la tierra como último recurso antes de tener que migrar forzosamente a las ciudades en busca de empleo.

La experiencia organizativa de los jornaleros en la ANUC durante los primeros años de la década del setenta se adelantó principalmente en algunas áreas cafeteras en donde se realizaron encuentros con pequeños y medianos propietarios, arrendatarios, aparceros y asalariados. Sin embargo esos intentos iniciales tuvieron sus dificultades pues una de las quejas de los propietarios consistía en el encarecimiento de los jornales al tiempo que el alza en los jornales era una reivindicación básica de los asalariados. El movimiento campesino, no obstante la gran dificultad que tuvo para organizar al proletariado agrícola, logró en aquellos años expresar en sus plataformas de lucha las reivindicaciones básicas de este sector: obtención de salarios justos, jornada diaria de trabajo de ocho horas; derechos de organización, movilización y huelga; abolición de los sistemas de trabajo a des-

---

(6) Ver la ponencia **El CRIC, una experiencia regional de participación y organización**, presentada en el Seminario-Taller Internacional sobre Pobreza y Desarrollo Regional patrocinado por la Universidad de Los Andes-Bogotá y el Instituto de Estudios Sociales de La Haya (Holanda), en Marzo de 1984.

tajo; remuneración de los días de descanso; pago de cesantías y otras prestaciones sociales, condiciones dignas de alimentación y alojamiento; servicios médicos y sociales; estabilidad en el trabajo y abolición de los despidos injustificados.

El fracaso organizativo de los asalariados rurales está ligado al fracaso del movimiento campesino, pero también corresponde a la naturaleza compleja de este sector, ya que una parte es totalmente asalariada, mientras que otra lo es a medias en el sentido de que mantiene diversos grados de relación con la producción parcelaria independiente o ligada a la gran empresa agropecuaria.

En la actualidad, como en la pasada década, el capitalismo no absorbe homogéneamente a la fuerza de trabajo: hay agroindustrias con gran cantidad de asalariados permanentes, haciendas ganaderas que retienen pocos trabajadores fijos bajo diversos tipos de contrato y frecuentemente con relaciones de compadrazgo con el hacendado; y cultivos de plantación que absorben masas de jornaleros temporales vinculados a destajo en épocas diversas del año. Todas esas condiciones heterogéneas de trabajo dificultan enormemente la unificación del movimiento entre los jornales a nivel nacional, siendo un poco más fuerte la sindicalización entre los trabajadores permanentes de algunas empresas agroindustriales (ingenios azucareros, industria de la palma africana y procesadoras de algodón y arroz) (7).

El Estado, a excepción de algunos esporádicos apoyos institucionales en el pasado para facilitar la circulación de la mano de obra y controlar el orden público en las cosechas, aún no ha definido una política de seguridad social para algo más de un millón de asalariados rurales, para quienes no han variado las condiciones de su trabajo: falta de garantías en la estabilidad, bajas retribuciones en los sistemas a des-

---

(7) ZAMOSC, León, *ibidem*, págs. 130 y siguientes.

tajo, jornadas extenuantes, retenciones en los pagos, obligación de adquirir subsistencias en los comisariatos de las fincas, pésimas condiciones de alojamiento, alimentación y salubridad. Para los migrantes, precisamente esa condición les genera sentimientos de inferioridad, inseguridad y desarraigo restringiéndoles su disposición para organizarse. Los sistemas de contratación basados en intermediarios someten de antemano a los trabajadores y hacen oscuro el vínculo patronal lo cual se complementa con las formas de pago a destajo que al distorsionar la perspectiva colectiva fomentan una visión individualista del trabajo al tener que entrar en una competencia con los demás asalariados, acuciados por la misma necesidad personal de sacar el mayor provecho posible de la temporada.

## **2.2. Estrategias del Estado y relaciones con el movimiento campesino**

A partir del cierre del período reformista (1961 - 1972), el Estado colombiano ha venido impulsando el desarrollo del sector agropecuario sobre la base de la gran empresa capitalista, a la cual le asigna el papel de producir materias primas para la industria interna y excedentes de exportación para la obtención de divisas. La oferta de alimentos se le deja a la denominada pequeña producción campesina a través del Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) que comenzó a implementarse desde 1976 pero con resultados no muy claros en cuanto a aumento de la productividad y de los ingresos campesinos.

Por otra parte, luego de la experiencia de la campaña de organización campesina para crear la Asociación Nacional de Usuarios, el Estado abandonó cualquier propósito de apoyo a la organización por temor a que se repita la beligerancia desde los campos contra la estructura latifundista, impulsando más bien una estrategia de control de las organizaciones campesinas y últimamente de reestructuración del aparato estatal para agilizar la operatividad comercial y restringir las actividades de fomento de la producción, regulación del mercado y capacitación campesina.

Durante los primeros años de la década del sesenta los programas de reforma agraria trataron de controlar los conflictos sociales vigentes que empezaban a poner en peligro la expansión del comercio mundial al área latinoamericana. Su aplicación concreta ya desde la segunda mitad de esa década obedeció más a la necesidad económica de equilibrar tanto la oferta y la demanda de mano de obra rural y urbana, como la de alimentos y excedentes agrícolas para contener el crecimiento de los salarios y generar recursos externos.

Actualmente esos dos aspectos se conjugan, cuando vuelve a debatirse sobre la necesidad de una reforma agraria pues el Estado se ve llevado a controlar el progresivo deterioro de las relaciones sociales en el campo para asegurar un clima favorable a los grandes inversionistas. Desde el punto de vista del capital cualquier tipo de reforma agraria contribuirá a su movilidad y al controlarse la fuerza de trabajo rural se mejorarán las expectativas para la inversión. Desde el lado de los campesinos, su agobiante situación ha presionado la movilización por el acceso a la tierra en lo que constituye una reforma agraria por las vías de hecho.

En la generalidad de las bases campesinas subsiste un hondo escepticismo sobre las posibilidades de una reforma agraria promovida desde el Estado, que modifique sustancialmente el patrón altamente concentrado de la tenencia y ponga en marcha un Plan de Desarrollo Agropecuario con fijación de metas de producción por tipos de cultivos y regiones, y asigne recursos para el cultivo y las fases posteriores de comercialización.

En ciertas regiones periféricas (Costa Atlántica, Magdalena Medio, Huila-Tolima, Cauca, Urabá), en donde el abandono estatal es mucho más palpable y los niveles de desempleo más alarmantes, el movimiento campesino ha adelantado tomas de latifundios improductivos y mediante ellas se intenta reconstruir la organización con una orientación de au-

tonomía frente al Estado y a los partidos políticos tradicionales (8).

La débil presencia del Estado en las regiones rurales pauperizadas ha contribuido a la agudización del conflicto terratenientes-campesinos, habiéndose producido una espiral de violencia cuyo control ha sido cada vez más difícil y en la que las organizaciones guerrilleras han penetrado y logrado diversos tipos de adhesión de grupos campesinos, aunque son estos últimos los que pagan las consecuencias cuando el Ejército desarrolla sus operativos de persecución de la guerrilla al entrar a reprimir violenta e indiscriminadamente a la población civil.

### **Campesinado y guerrilla**

Un reciente estudio sobre la violencia actual en el campo (9) afirma que la guerrilla colombiana ha persistido en la medida en que existe un conflicto agudo en torno a la distribución de la tierra, los ingresos y las oportunidades sociales, pues las guerrillas logran su arraigo en las poblaciones campesinas más pobres y en las zonas más apartadas donde aparecen problemas crónicos de insalubridad, desnutrición y desempleo y donde, además, se advierte una clara polaridad entre ricos hacendados y masas proletarias paupérrimas. Las diversas acciones que las guerrillas emprenden contra los grandes hacendados se presentan así como actos de reivindicación social que producen enorme impacto entre las poblaciones campesinas y dependiendo de las circunstancias, logran de ellas actitudes de simpatía, solidaridad y apoyo.

---

(8) El CINEP hace un seguimiento de la coyuntura de luchas campesinas en la mayor parte de las regiones del país y mantiene un archivo sobre el movimiento por la tierra y el análisis de las organizaciones campesinas sobre él.

(9) Ver el documento **Bases para la Formulación de una Política de Desarrollo en Regiones Ganaderas de Violencia Social**, elaborado por Jairo Morales, en Julio de 1982.

El mismo estudio argumenta que otro factor de persistencia de la guerrilla es que al ser tratada por medios estrictamente militares, ella se ve favorecida para presentarse ante los campesinos como la antítesis de las Fuerzas Armadas ya que al aplicarse en forma indiscriminada la estrategia de contrainsurgencia se reprime tanto a la población civil como a la guerrilla, teniendo como resultado final esta indiferenciación el desgaste del aparato militar y el descrédito y distanciamiento de las masas campesinas.

La actitud de la mayor parte de los ganaderos fue, por un lado, aceptar la convivencia con el problema guerrillero, incluyendo en los costos de las haciendas las exigencias económicas de la guerrilla; y por otro, mantener una actitud de de insolidaridad con el desarrollo social de sus zonas en donde los beneficios provenientes de la actividad ganadera no llegan a la población trabajadora de sus fincas y menos a los caseríos y asentamientos campesinos que proveen regularmente a las haciendas de mano de obra temporal. Así, las exigencias sociales de mejoría de las condiciones de vida y de salario de las gentes del campo, en muchos casos, son desatendidas por los ganaderos que ante cualquier solicitud colectiva reaccionan pidiendo la represión militar o policiva.

La más reciente estrategia del Estado para controlar el conflicto en las zonas de violencia social está contenida en el denominado Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), que hace parte de la política de paz del actual régimen y consiste en un paquete de recursos para la compra y explotación de las tierras, y construcción de infraestructura en dichas zonas de conflicto guerrillero. En este plan se le da una mayor participación al Ejército para que adelante los "Planes de Acción Cívico Militar" concebidos desde los años setenta y que persiguen predisponer favorablemente a la población civil para la ejecución de obras de infraestructura con la asesoría directa del Ejército. A largo plazo la estrategia busca ampliar la frontera agrícola por intermedio del asentamiento de familias de ex-guerrilleros amnistiados (es decir, de aquellos beneficiados por la Ley 35 de 1.982 o Ley de amnistía).



La cabeza del asentamiento debe ser reservista del Ejército. El asentamiento recibe una subvención del Comando del Ejército de la respectiva zona, equivalente al salario mínimo rural durante los dos primeros años y le presta asesoría técnica, médica, agronómica, educacional, etc. a cargo de soldados bachilleres y equipos de profesionales aceptados previamente por el Ministerio de Defensa.

Mediante el Plan de Rehabilitación el Estado delega en el estamento militar su presencia civil en las zonas de confrontación guerrillera, creándose un nuevo tipo de militarización, ya que el Ejército asume tareas que antes eran propias de la sociedad civil: brigadas cívico - militares en salud y obras públicas, nombramiento de soldados-maestros, etc. El movimiento campesino se viene oponiendo al plan ya que otro de sus presupuestos es que para su realización la empresa privada debe hacer inversiones productivas. En tal caso quienes se favorecen son los grandes agricultores y ganaderos que entrarán a apropiarse de las nuevas tierras valorizadas por las vías que se construirán y "pacificadas" por virtud de los planes de acción cívico-militar. Los campesinos no ven cómo el Estado pueda garantizar que, por ejemplo, la investigación y la transferencia tecnológica, así como los aspectos del desarrollo rural comunitario puedan favorecer a los pequeños y medianos propietarios, con la presencia en esas zonas de grandes inversionistas que limitarán aún más los canales de participación ciudadana al autoconstituirse en voceros de la comunidad, como ha sucedido en la región del Magdalena Medio.

### **2.3. La situación de la organización campesina**

Como ya dijimos antes, el resurgimiento de las luchas por la tierra es un factor que presiona a las diversas organizaciones existentes a nivel regional para que reconstituyan una organización de escala nacional dado el nulo apoyo del Estado en ese sentido. En ese proceso se viene trabajando con múltiples tropiezos y dificultades provenientes tanto del interior del movimiento campesino como de fue-

ra de él, pero en el cual se han logrado notorios avances como la realización conjunta de encuentros entre grupos y organizaciones campesinas y populares de distintas orientaciones ideológicas pero coincidentes en la necesidad de unir fuerzas para presionar soluciones desde el Estado. En el recorrido de este complejo proceso se ha ido ganando una visión más amplia de los problemas de los diversos sectores del campesinado y de las causas reales de la debilidad organizativa del movimiento. Hoy se conoce mejor que antes cómo funcionan las estructuras regionales del poder político, cómo opera el control social mediante la represión y la división de la organización por parte de latifundistas y caciques políticos en acuerdo con las autoridades policivas y militares.

La nueva dirigencia campesina, luego de muchos esfuerzos infructuosos para la reconstrucción de su organización, ha logrado una mayor conciencia sobre la acción contrapuesta del Estado para bloquear directa o indirectamente cualquier intento de gestión autónoma en tal sentido y no desconoce que las mismas instituciones oficiales, cada una por su lado, han impulsado programas de organización de la población para llevar a cabo sus programas, creando una multiplicidad de organizaciones de base, en su mayor parte de corta duración por el estilo de promoción paternalista del Estado benefactor, mantienen los mecanismos de dominación clientelista para fines electorales y logran objetivos de desmovilización campesina.

Existe un acuerdo básico por parte de las todavía dispersas organizaciones en el sentido de que la estrategia para el avance de un proceso de reunificación consiste en el impulso a las formas locales de organización que persiguen objetivos inmediatos de tipo económico. De otro lado no se ve que haya contradicción entre mantener una organización autónoma y obtener su reconocimiento legal puesto que esto último le permite dotarla de estatutos y obtener la representación ante las entidades del Estado, facilitándose así las campañas de crecimiento, de denuncia de la acción represiva y de defen-

sa contra la marginación ideológica de la derecha que le atribuye un carácter subversivo a cualquier acto de protesta popular.

Igualmente, se ve la necesidad de recuperar la experiencia organizativa de la ANUC durante los años setenta, cuando la Campaña de Organización Campesina y las acciones de tomas de tierra promovieron un liderazgo desde la base y una masiva participación que impidió la formación de una capa de líderes intermedios ligados a los partidos tradicionales que pretendieron mantener las luchas dentro de criterios conciliadores y a una gran distancia de los niveles centrales del Gobierno. Fue entonces cuando emergieron muchos líderes de extracción campesina que obtuvieron rápidamente el apoyo de sus bases y enfrentaron a los dirigentes alineados en los partidos tradicionales. Las movilizaciones por la tierra fueron el criterio de jerarquización y valoración de un liderazgo combativo que logró por cierto tiempo mantener la articulación entre la participación espontánea del campesinado de base y el rol coordinador y orientador de la organización gremial en los tres niveles en que fue estructurada: local, regional y nacional.

En gran parte estos planteamientos están siendo desarrollados por el movimiento indígena que ha logrado consolidar —también con numerosas dificultades internas y externas a él— su estructura organizativa a nivel regional y a escala nacional en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) creada en 1981. En lo que definen como “estilo de trabajo de abajo hacia arriba”, la organización indígena parte de la comunidad para consolidarla y desde allí se busca desarrollar una estructura organizativa de alcance regional y nacional, siempre que la extensión de actividades a una escala más amplia no rebase las posibilidades reales de la etapa que vive el movimiento. Respecto a la relación lucha política-lucha reivindicativa, los indígenas creen que en la realidad de la praxis social no se da una separación clara entre esos niveles y que habiéndosele concedido una gran importancia a las reivindicaciones de tierra, producción, salud,

educación, etc, se ha ido llegando gradualmente a los niveles más avanzados de conciencia política.

### 3. POSIBILIDAD DE DESARROLLO DEL MOVIMIENTO Y DE LA ORGANIZACION CAMPESINA

Veamos, para concluir, lo que pueden ser las condiciones de posibilidad de desarrollo del movimiento campesino, a partir de su actual proceso de lucha y de reorganización, no sin dejar de considerar, obviamente, que los demás actores sociales (Estado, partidos, los otros sectores populares) afectarán positiva o negativamente tal desarrollo en la medida en que avancen o no hacia una verdadera democratización de la sociedad colombiana en los próximos años.

1. En primer término, que se cristalicen en el futuro inmediato los proyectos de apertura política y reformas socio-económicas planteadas por el actual régimen, ya que tienen especial incidencia con los cambios que impulsa el movimiento campesino.

2. Que se opere un cambio en la orientación y el estilo de las políticas oficiales de promoción campesina de tal manera que complementen y no suplanten paternalísticamente los esfuerzos de autogestión campesina, como sucedió con el anterior proyecto de reforma agraria. El Ministerio de Agricultura necesita formular una clara política de organización rural que implique centralizar y racionalizar los programas de promoción y capacitación, hoy muy dispersos entre las entidades adscritas al Ministerio.

3. Al interior del movimiento, el que se consoliden los programas aislados de carácter económico de algunos grupos (tiendas, cooperativas, empresas asociativas de producción) y el fortalecimiento de relaciones horizontales tanto entre esas mismas organizaciones como son sectores populares urbanos (sindicatos, barrios, etc.).

4. La consolidación de ciertos procesos de organización gremial campesina e indígena al estilo de los que se vienen dando en las regiones de mayor conflicto por la tierra, entre el movimiento indígena, y el movimiento de artesanos y productores de fique, entre otros.
5. La erradicación de ciertos vicios de la izquierda tradicional (dogmatismo, vanguardismo, hegemonismo, etc.) todavía con fuerte raigambre en una parte de la actual dirigencia campesina, los cuales se han convertido en un gran obstáculo para los intentos de reconstrucción y democratización de las estructuras de la organización.
6. La incorporación e integración de los diversos intereses de los sectores de la población rural (pequeños y medianos productores, jornaleros, semi-jornaleros, etc.) en esquemas de descentralización organizativa, dada la real dispersión geográfica en que viven.

---

*La publicación de este estudio es la divulgación de los trabajos de investigación realizados para el proyecto "Movimientos Sociales ante la crisis en América Latina", en el marco del programa PAL ("Las perspectivas de América Latina") que coordina el Profesor Pablo González Casanova del IISUNAM (Instituto de Investigaciones sociales de la Universidad Nacional de México) y que para Sudamérica ha sido auspiciado mediante un convenio entre la Universidad de las Naciones Unidas (U.N.U.) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (C.L.A.C.S.O.).*